



GD-F-008 V.9

Página 1 de 9

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010005045 DEL 09/03/2017

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015 y en la Resolución No. SSPD 20111300032265 de 2011,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que el Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual “se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que “La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007.”

Que la Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20111300032265 del 21 de octubre de 2011, delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con el Decreto 1077 de 2015; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el Municipio de HONDA del Departamento de TOLIMA, es de categoría 6 y como no fue prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2015, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010055105 del 30 de septiembre de 2016, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al Municipio de HONDA del Departamento de TOLIMA, por no haber cumplido los siguientes requisitos previstos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015:

- “Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida.”.

- “Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados e la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.”

El 28 de octubre de 2016, el señor Juan Guillermo Beltrán Amórtegui, en su calidad de alcalde del Municipio de HONDA, compareció a esta SSPD a notificarse personalmente del contenido de la Resolución No. SSPD 20164010055105.



El Municipio de Honda, mediante el documento radicado en esta entidad bajo el número SSPD 20165290779162 del 15 de noviembre de 2016, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20164010055105.

2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y PRUEBAS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN

2.1. Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN.

El Municipio de Honda-Tolima no ha sido el prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado desde que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante decisiones de primera y de segunda instancia impuso como sanción a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE HONDA "EMPREHON E.S.P" la prohibición de la prestación de los servicios públicos domiciliarios directa o indirectamente, por un término de diez (10) años, término que inició el día 30 de diciembre de dos mil trece (2013).

En consecuencia a la sanción impuesta a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE HONDA "EMPREHON E.S.P", la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios señaló lo siguiente: *"Bajo este panorama, este Despacho dará aviso al señor Alcalde y al Concejo Municipal de Honda-Tolima, de la situación presentada con la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la EMPRESA DE*

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE HONDA- EMPREHON ESP, con el fin de que se sirva dar aplicación al artículo 5° de la Ley 142 de 1994, y ese caso (sic), se tomen las medidas que la ley tiene establecidas para que se asegure a los usuarios de esa empresa en el Municipio de Honda, la prestación de los mencionados servicios."

El Concejo Municipal de Honda, mediante Acuerdo No. 020 del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013) sancionado el dos (02) de enero de dos mil catorce (2014), facultó al Alcalde para realizar la liquidación de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE HONDA "EMPREHON", trámite que se encuentra en proceso.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el CONCEPTO 171 DE 2014 ha señalado lo siguiente: *".....cuando un municipio adelanta el trámite del Artículo 6° para garantizar la prestación del servicio por virtud del mandato del Artículo 5 de la Ley 142 de 1994 y se presenta una empresa interesada en prestarlo, pero para hacerlo se requiere utilizar la infraestructura de propiedad de la Entidad territorial, no puede en virtud de esa invitación entregar la infraestructura al prestador interesado puesto que necesariamente debe darse aplicación al Parágrafo del Artículo 31 de la Ley 142 de 1994, según el cual debe acudir al proceso licitatorio para este efecto. (.....)".*

Ante la necesidad de la normalización de la prestación de los servicios públicos en el municipio, el Concejo Municipal de Honda mediante el Acuerdo 006 de 2016 modificado parcialmente por el 010 de 2016, autorizó al *"Alcalde Municipal de Honda-Tolima, para que adelante y participe en el proceso de constitución de una empresa de servicios públicos domiciliarios, como una sociedad de acciones de carácter oficial, cuyo objeto sea la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, aseo y alcantarillado, de conformidad con lo estipulado particular por la Constitución Nacional, la Ley 142 de 1994 y el Código de Comercio."*

Esta administración ha tratado de normalizar la difícil situación en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en la que se vio sumergido el Municipio por los motivos ya expuestos, esto bajo la importancia que tiene el servicio de acueducto en el buen desarrollo de una comunidad y además reconociendo lo dispuesto en reiteradas ocasiones por la Corte Constitucional que sobre el derecho del agua ha dispuesto lo siguiente:

"El agua se considera como un derecho fundamental y, se define, de acuerdo con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como "el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o doméstico". El agua se erige como una necesidad básica, al ser un elemento indisoluble para la existencia del ser humano. El agua en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación pues se erige como un derecho fundamental y como un servicio público. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad."

Al entender el agua esa doble connotación de derecho fundamental y de servicio público, todo lo que afecte la prestación y la disposición de los recursos económicos para la prestación de manera eficiente de este servicio público, se convierte en una amenaza contra el derecho constitucional que tiene a ciudadanía hondana.

Así mismo, para el caso en concreto, luego de hacer la revisión de las causales que ocasionaron la Descertificación del municipio de Honda y que afectan de manera directa el derecho aludido, se encuentra que se trata de unos defectos estrictamente procedimentales que ya han sido subsanados y que no deberían ser considerados de manera estricta para disponer la Descertificación del municipio para el año 2015, descertificación que genera traumatismos en la implementación de las soluciones que se han dado al grave problema de la prestación del servicio público.

Sobre lo anterior, es importante resaltar que el artículo 228 de la Constitución Política consagra como uno de los principios de la administración de justicia la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; según esta norma:

"ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo."

La Constitución Política dispone entonces que es uno de los principios de la Administración de Justicia y de quienes emiten decisiones que afecten derechos reconocidos constitucionalmente es la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

En la Sentencia C-131 de 2002, la Corte se refirió al tema de la constitucionalización del derecho procesal de la siguiente manera:

“2. Uno de los espacios en los que mayor incidencia ha tenido el constitucionalismo es el derecho procesal. En la tradición del positivismo formalista el derecho procesal estaba desprovisto de una vinculación sustancial con lo que era materia de litigio; se agotaba en una ritualidad cuya configuración se realizaba fundamentalmente en la instancia legislativa; era ajeno a propósitos que lo conectaran con los fines estatales y la protección de las garantías que lo integraban sólo se brindaba en esas actuaciones y bajo los estrechos parámetros de protección establecidos por el legislador. Así, no llamaba a interés el hecho de que, en materia de derechos, la sustancia que se tenía entre manos se desvaneciera ante las ritualidades y formalidades de unos procedimientos que las más de las veces se explicaban por sí mismos y que perdían puntos de contacto con lo que era objeto de controversia.

Pero esa dimensión del derecho procesal ha sido superada pues el constitucionalismo ha rescatado las garantías centenariamente elaboradas como contenidos del derecho procesal para vincularlas inescindiblemente a la realización de las normas sustanciales. Las ha dotado de una teleología que no se explica a partir del solo rito o procedimiento sino en relación directa con las normas jurídicas que consagran los efectos jurídicos que las partes pretenden. Las ha redimensionado para darles ahora el carácter de facultades irrenunciables, históricamente consolidadas y positivizadas; esto es, para advertir en ellas derechos fundamentales.

Con ello, ha dotado al proceso de una nueva racionalidad pues ya no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de cualquier manera sino de realizarlas reconociendo esas garantías irrenunciables pues su respeto ineludible también constituye una finalidad del proceso. (...)” (Negritillas fuera de texto).

Así mismo se alude que en la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios lo que la Corte constitucional determina como **EXCESO RITUAL MANIFIESTO** y que ha definido en repetidas ocasiones así:

Esta Corporación ha dicho que el defecto procedimental se enmarca dentro del desarrollo de dos preceptos constitucionales: (i) el derecho al debido proceso (artículo 29), el cual entraña, entre otras garantías, el respeto que debe tener el funcionario judicial por el procedimiento y las formas propias de cada juicio, y (ii) el acceso a la administración de justicia (artículo 228) que implica el reconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial y la realización de la justicia material en la aplicación del derecho procesal. Dentro de la primera categoría, la Corte ha considerado que se presenta un defecto procedimental absoluto cuando el funcionario desconoce las formas propias de cada juicio. Por excepción, también ha determinado que el defecto procedimental puede estructurarse por exceso ritual manifiesto cuando "(...) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia". Es decir que el funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales

En conclusión la Administración ha intentado de todas las formas normalizar la situación precaria en la que se encontraba el Municipio en cuanto a la prestación del servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo, y ha venido cumpliendo con los parámetros que el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015 estableció como requisitos que debían acreditar y cumplir los municipios para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, pero la falta de acreditación de los mismos a la fecha que reporta la entidad no puede ser obstáculo para que la Superintendencia determine que los requisitos, que son de carácter puramente formal, puedan afectar de manera directa.

A. REQUISITO: Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique.

Mediante el Acuerdo 017 del 20 de junio de 2016, del Concejo Municipal de Honda, se Definieron los Porcentajes de subsidios y aportes solidarios para los suscriptores de servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de Honda.

El Artículo Segundo del mencionado Acuerdo dispuso lo siguiente: *"Establézcase como porcentaje de aporte solidario a los suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, un 50% para los suscriptores clasificados comerciales los estratos 5 y de los estratos 6, y para los suscriptores industriales el 30%; estos porcentajes del valor de la factura.*

Si bien es cierto que el Acuerdo 011 de julio de 2014 no establecía los porcentajes de aporte solidario para los estratos 5 y 6 cuya existencia para la vigencia 2015 fue verificada en el reporte estratificación y coberturas que hizo el entre territorial para la referida anualidad si subsanó dicho incumplimiento con el Acuerdo 017 de 2016. (Se anexa copia Acuerdo).

B. REQUISITO: Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal.

En cuanto al requisito sobre el reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal, para la fecha en la que se reportó a la Superintendencia dicha información, el municipio no contaba con el mencionado Comité.

Mediante el Decreto 125 del 26 de septiembre de 2016 el Alcalde municipal de Honda, conformó el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica en el municipio de Honda- Tolima, el cual funge como un órgano asesor, consultivo e veeduría y apoyo al Alcalde municipal y como segunda instancia de atención de reclamos por estrato.

Dicho lo anterior, el Municipio de Honda ha subsanado los incumplimientos que conllevaron a que su Despacho decidiera Descertificar al municipio de Honda para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico correspondientes a la vigencia 2015.

III. SOLICITUD

Una vez sustentado el recurso de reposición, solicitó de manera respetuosa tenga en cuenta lo dispuesto y revoque lo resuelto en la Resolución No. SSPD- 20164010055105 Del 30 de septiembre de 2016 que decidió la descertificación del municipio de Honda para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico correspondientes a la vigencia 2015.

2.2. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el documento radicado con el No. 20165290779162, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegaron los siguientes documentos para que sean tenidos en cuenta como prueba:

2.2.1. Copia del Acuerdo municipal No 006 de 2016 *"Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para adelantar el proceso de constitución de una empresa de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Honda – Tolima como una empresa por acciones de carácter oficial"*.

2.2.2. Copia del Acuerdo No. 010 de 2016 *"Por medio del cual se modifica el artículo primero y tercero del Acuerdo 006 de marzo de 2016"*.

2.2.3. Copia del Acuerdo Municipal no. 017 de 2016 *"Por el cual se definen los porcentajes de subsidios y aportes para los suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Honda"*.

2.2.4. Decreto 125 del 26 de septiembre de 2016, *"Por medio del cual se conforma el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica en el municipio de Honda- Tolima y se modifica el Decreto No. 039 del 2 de mayo de 2005"*.

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.

3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta SSPD procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

3.1. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el "Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida"

La Resolución No. SSPD 20164010055105 del 30 de septiembre de 2016, consideró incumplido este requisito, toda vez que el documento cargado en el sistema correspondía a las actas para conformar el

Comité Permanente de Estratificación en el Municipio de Honda. Sin embargo, dichas actas no corresponden a lo solicitado por la norma, que es la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida.

Ahora bien, frente a lo aportado por el municipio en el recurso, en el cual se expone que no contaba con un Comité Permanente de Estratificación, y que este fue conformado mediante el Decreto 125 del 26 de septiembre de 2016, se recuerda que la obligación de los municipios y distritos para crear el comité existe desde la expedición de la Ley 732 del 25 de enero de 2002, como organismo local de apoyo y veeduría de la estratificación:

"Artículo 6°. Reclamaciones individuales. [...].

Parágrafo 1°. Los Comités Permanentes de Estratificación funcionarán en cada municipio y distrito de acuerdo con el modelo de reglamento interno que les suministre el Departamento Nacional de Planeación el cual deberá contemplar que los Comités harán veeduría del trabajo de la Alcaldía y que contarán con el apoyo técnico y logístico de la Alcaldía, quien ejercerá la secretaría técnica de los Comités. Dicho reglamento también definirá el número de representantes de la comunidad que harán parte de los Comités y establecerá que las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios residenciales harán parte de los Comités. Estas prestarán su concurso económico para que las estratificaciones se realicen y permanezcan actualizadas, de acuerdo con la reglamentación que el Gobierno Nacional haga del artículo 11 de la Ley 505 de 1999".

Es así, como recae sobre el municipio el incumplimiento de esta obligación, así como la del requisito en comento. Al respecto se recuerda que el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015 establece aspectos y criterios para certificar que son taxativos, y que a esta Superintendencia no se le da facultades para interpretar, tasar o reemplazar los requisitos.

En este sentido, resulta oportuno recordar que para reportar la información el municipio debía ceñirse a los plazos estipulados en la norma, esto es en el artículo 2.3.5.1.2.1.9 del Decreto 1077 de 2015 y la Resolución No. 0275 del 29 de abril de 2016, normas de tipo procesal que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1564 de 2012 "(...) son de orden público y, por consiguiente de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley".

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado así:

"Pues bien, nótese cómo las leyes de stirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas.", además advierte que: "(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo." y concluye señalando: "En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso.

(...)Lo anterior, por cuanto el señalamiento de términos judiciales con un alcance perentorio no sólo preserva el principio de preclusión o eventualidad sino que, también, permite, en relación con las partes, asegurar la vigencia de los principios constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, ya que al imponerles a éstos la obligación de realizar los actos procesales en un determinado momento, so pena de que precluya su oportunidad, a más de garantizar una debida contradicción, a su vez, permite otorgar certeza sobre el momento en que se consolidará una situación jurídica."

Así las cosas, como sucedió en este caso, era indudable que al dejarse vencer el término para reportar la información en el SUI, la única decisión viable que puede tomar esta SSPD consiste en confirmar como incumplido el requisito bajo estudio.

4.2. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el "Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados e la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complementa o sustituya"

1 Corte Constitucional. Sentencia T. - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araujo Rentería.

La Resolución No. SSPD 20164010055105, consideró este requisito como incumplido, toda vez que el Acuerdo Municipal No. 011 del 16 de julio de 2014, reportado el 20 de abril de 2016, no fijó contribuciones para los estratos 5 y 6, como se aprecia a continuación:

ARTÍCULO PRIMERO: Establézcase como subsidio para los estratos 1 y 2, para los servicios de acueducto y alcantarillado, un porcentaje del 25% y 20% respectivamente.

ARTICULO SEGUNDO: Establézcase como subsidio para los estratos 1 y 2, para el servicio de aseo, un porcentaje del 50% y 40% respectivamente.

ARTICULO TERCERO: Establézcase como aporte solidario o sobreprecio para los usos comerciales un porcentaje del 50%, para los usuarios industriales un porcentaje del 30% para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Ahora bien, toda vez que el medio oficial de reporte para la evaluación de los criterios es el Sistema Único de Información – SUI, se revisó procedió a revisar el Formato de Estratificación y Coberturas REC 1A2015:

reportes.sui.gov.co/fabricaReportes2/frameSet.jsp?idreporte=acd_adm_012

Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI **general** **consulta de información**

multiservicio/administrativo/Reporte Coberturas Municipales Estratificación - Con Soluciones Particulares ☐ calidad del reporte

(Para formato HTML) N° Registros en pantalla todos

Año: 2015

Departamento: TOLIMA

Municipio: HONDA

Servicio: ACUEDUCTO

FECHA DE CERTIFICACION 29-APR-2015

COBERTURAS CON SOLUCIONES PARTICULARES

RESIDENCIAL

	Total Residencial	Estrato 1	Estrato 2	Estrato 3	Estrato 4	Estrato 5	Estrato 6	No Estratificado
TOTAL MUNICIPAL Número total de predios	10534	2927	3555	3455	449	130	18	ND
Número de predios con acceso al servicio	7915	2230	3324	1826	420	100	15	ND
% Cobertura Usuarios	75.15	28.17	41.99	23.07	5.31	1.26	0.2	ND

Habida cuenta de la existencia de 130 predios de estrato 5 y 18 de estrato 6, de los cuales 100 y 16 cuentan con servicios públicos respectivamente, es claro que el acuerdo bajo estudio no cumple con lo establecido en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, toda vez que no fijó el porcentaje de aporte solidario para los estratos contribuyentes existentes en el municipio.

Frente a tal reparo, el recurrente manifiesta que aporta el Acuerdo Municipal No. 017 de 2016, señalando que su administración ya se ocupó de este particular, sin embargo este acto administrativo no rigió para la vigencia evaluada, esto es durante el año 2015, y por lo tanto no subsana el error sustancial y formal en que incurrió.

Las dificultades alegadas por el municipio en torno a los inconvenientes con la empresa de servicios públicos de Honda, no son circunstancias sobrevinientes que eximan al municipio del cumplimiento de sus obligaciones, pues son funciones que siguen vigentes, independientemente de las circunstancias

expuestas en su recurso, y lo siguen siendo para los municipios descertificados, como se encuentra establecido en el artículo 2.3.5.1.2.1.15 del Decreto 1077 de 2015.

Finalmente, en lo referido al argumento del recurrente relacionado con el exceso ritual manifestado, es de señalar que con la descertificación del Municipio de Honda, esta SSPD no ha hecho prevalecer una forma procesal sobre el derecho sustancial. Según lo señala el artículo 228 de la Constitución Política, el principio de la prevalencia del derecho sustancial constituye un imperativo dentro del ordenamiento jurídico, el cual no es excluyente de las normas procesales ni preferente de las normas sustanciales.

Sobre este tema la Corte Constitucional se pronunció² y aclaró lo siguiente:

"(...) Si bien este principio constitucional adquiere una gran trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan de valor o significación. Hay una tendencia en este sentido, que pretende discutir la validez de las normas que establecen requisitos y formalidades, y que es preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en estas materias constitucionales, y concluir entonces que, no obstante la aludida prevalencia, dichas normas cuentan también con firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas(...)"

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no cumplió los requisitos relacionados con el reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal y el reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011, y por lo tanto, el recurso formulado por el señor Juan Guillermo Beltrán Amórtegui, como representante legal del municipio de HONDA, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20164010055105 del 30 de septiembre de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

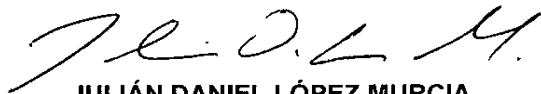
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del Municipio de HONDA del Departamento de TOLIMA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR, una vez en firme, el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de TOLIMA, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



JULIÁN DANIEL LÓPEZ MURCIA

Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Vanessa Benavides- Contratista Grupo de Certificaciones e Información ¹³
 Revisó: Carlos Andrés Bernal Casas – Abogado Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo ¹⁴
 María Eugenia Sierra Botero- Coordinadora Grupo de Certificaciones e Información
 Expediente: 2016401351600082E

² Corte Constitucional. Sentencia C - 215 del 28 de abril 1994. MP Doctor. Fabio Morón Díaz